

CARTA R.C.T. N° 3517

SANTIAGO,

28 NOV 2014

SEÑOR



PRESENTE

Junto con saludarlo, y en respuesta a su solicitud de acceso a la información realizada a nuestro Servicio e ingresada bajo el número de contacto **AK002W0004684**, mediante la cual se solicita "...Se requiere nómina de fallecidos desde los años 1970 a 2014, de las provincias de marga marga (quilpué, limache olmue, villa alemana) y provincia de valparaíso (valparaíso, viña del mar, quintero, puchuncaví, Casablanca, juan fernandez, con con), con los siguientes datos nombre, rut, fecha de nacimiento, fecha de defunción y causa de la defunción...", informo a usted lo siguiente:

En cuanto al RUN de las personas, cabe señalar que, de lo dispuesto en el DL N° 26/1924, DL N° 102/1924 y DFL N° 51/1943, todos del Ministerio del Interior y la Ley N° 6.880 de 19 de abril de 1941, que conforman el cuerpo normativo que regula el sistema de identificación obligatorio actualmente vigente en nuestro país, se desprende que la finalidad de éste; que contiene datos sensibles y personales, es contar con un número único nacional que permita la identificación civil de las personas y la emisión de los documentos que dan fe de su identidad ante terceros y en consecuencia, solo pueden ser utilizados para dicha finalidad.

Por su parte, el tratamiento de los datos personales y sensibles se encuentra reglado por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, norma que en su artículo 20 establece que "el tratamiento de **datos personales** por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse dentro de la materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes...".

Por "tratamiento", de acuerdo a lo dispuesto en la ya mencionada ley, se entiende "cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos en cualquier forma".

Ahora bien, el Consejo para la Transparencia ha sostenido expresamente, en la decisión tomada a propósito del Amparo N° A-33-2009 de fecha 30 de junio de 2009 que el RUN de las personas es un dato personal al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y que, en consecuencia, su divulgación a terceros sólo puede realizarse cuando la ley o su titular lo autorice. Si se trata de una persona fallecida, pueden solicitar la información requerida, sus herederos o mandatarios, la cual le será entregada personalmente previa acreditación de su identidad y relación con el causante.

La citada ley contempla como excepción a la reserva de datos personales lo dispuesto en su artículo 4, que autoriza la comunicación de tal información, entre otros casos, en el evento que éstos provengan o se recolecten de fuentes de libre acceso al público, esto es, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.

Por lo tanto, en relación a la información relativa al RUN de las personas, cabe señalar que la normativa consagra una causal de reserva al efecto, lo que se encuentra avalado por el Consejo para la Transparencia. En este sentido, cabe señalar que el artículo 21 N° 2, de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública señala que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, se da en el caso que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas particularmente tratándose de su seguridad, su salud, **la esfera de su vida privada** o derechos de carácter comercial o económico, **y de conformidad con lo expuesto, se deniega el acceso a la información solicitada.**

Ahora bien, con respecto a dicha información, conviene tener presente, la distinción entre **registro público y fuente accesible al público**, de conformidad a lo dispuesto en la decisión de amparo C1335-13.

En efecto, a través de la citada decisión, el Consejo ha resuelto en el considerando N°8 que “los llamados a cautelar la honra y determinar qué información desean sustraer del conocimiento de terceros no vinculados al fallecido son sus familiares. Por lo tanto, a pesar de no haberse utilizado el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificándose a los familiares de los fallecidos en dicho caso, el Consejo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, consistente en velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a lo argumentado en la referida decisión tiene el dato relativo al nombre de los fallecidos por meningitis, del que sólo puede disponer su familia, **resolverá en definitiva disponer el rechazo del amparo en esa parte**”.

Luego, el Consejo procede a aclarar la **diferencia entre lo que es fuente accesible al público y un registro público.**

Conforme a ello, en el considerando N°12 el Consejo indica “Que el artículo 177 del Reglamento Orgánico del Registro Civil (DFL N°2.128, de 1930) señala que: “Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones o por el que haya asistido al difunto en su última enfermedad. En dicho certificado se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto; el nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres; la hora y el día del fallecimiento, si constare, o, en otro caso, las que se consideren probables, y la enfermedad o la causa que haya producido la muerte”. A su turno, el artículo 182 N°5 de dicho texto legal preceptúa que: “La inscripción del fallecimiento se practicará en el Registro respectivo y contendrá, a más de las generales establecidas en el artículo 89, las siguientes indicaciones: 5) La enfermedad o la causa que hubiere producido la defunción, en caso de ser conocida”. Por su parte, el artículo 211 del aludido reglamento previene que podrán solicitar certificados del Registro Civil, además de los interesados en una inscripción, todas las personas que lo deseen. Asimismo, el artículo 24 de la Ley N°4.808, sobre Registro Civil, indica que: “Los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, tendrán el carácter de instrumentos públicos”.

En efecto, el Consejo hace una distinción, señalando que “...para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional **se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco**, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar...”, cuestión que no ocurre, conforme lo que indica la citada decisión del Consejo para la Transparencia, con la información que obra en el registro de defunciones a cargo de este Servicio.

A mayor abundamiento, el considerando 13) dice lo siguiente: “Que, a pesar de tratarse de información que obra en poder de la Administración y a la que puede accederse a través de un procedimiento de certificación, ello no implica que el legislador haya considerado públicas las causas que han ocasionado la muerte de una persona como si se tratara de una fuente accesible al público en los términos de la Ley N°19.628. En efecto, no obstante su consideración como instrumento público, **el certificado de defunción –así como las circunstancias de la muerte que constan en él– se entrega en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos como**

**nombre, apellido y RUN del fallecido, para poder acceder al registro público del Servicio de Registro Civil e Identificación**.

Luego determina que “*en consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar*” (considerando 14); “*Que, mientras en el Ordenamiento Jurídico nacional las fuentes accesibles al público están definidas en función de la existencia de restricciones al acceso a los datos contenidas en las mismas, en el Ordenamiento español, en cambio, se pone foco en la posibilidad de consultar las fuentes, las que el propio legislador ha optado por enumerar en forma taxativa*” (considerando 18); “*Que, por tanto, en el caso concreto, el hecho que las circunstancias de la muerte de una persona se encuentren contenidas en un registro público, cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar el nombre y apellidos y/o el RUN del fallecido, excluye la posibilidad de considerar a este registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la Ley N° 19.628*” (considerando 19).

En consecuencia, al tratarse de una fuente que no es accesible al público, no es posible –conforme a lo indicado en la actual jurisprudencia del Consejo para la Transparencia- permitir el acceso a la información contenida en el registro de defunciones, siendo indiferente el hecho de que en otra época se haya efectuado la entrega de la citada información por parte de este Servicio, en un momento en el que no se tenía certeza jurídica sobre la posibilidad del mencionado acceso.

Por otra parte, se hace presente a usted, que concurre además la causal de reserva o secreto establecida en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, la que dispone que se podrá denegar total o parcialmente la entrega de la información “**1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales**”.

Finalmente, se informa que la ley contempla un plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la presente respuesta, para que usted solicite amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la

Transparencia y que se procederá en su oportunidad a incorporar esta respuesta, en el Índice de actos y documentos calificados como secretos y reservados del Servicio.

Saluda atentamente a usted,

  
**LIGIA TORO ARAYA**  
Abogado  
“Por Orden del Director Nacional”

  
**LTA/DRP**  
**Distribución**  
- La indicada  
- Archivo RCT